



La mina **Lagunas Norte** (operada por Boroo Misquichilca) está ubicada en el distrito de Quiruvilca, provincia de Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, al este de la ciudad de Trujillo en los Andes norte del Perú.

Empresa Minera Boroo llega al Chocó Andino de Pichincha y a Ecuador: un historial internacional de denuncias por impactos ambientales, vulneraciones de derechos y criminalización de personas defensoras de la naturaleza

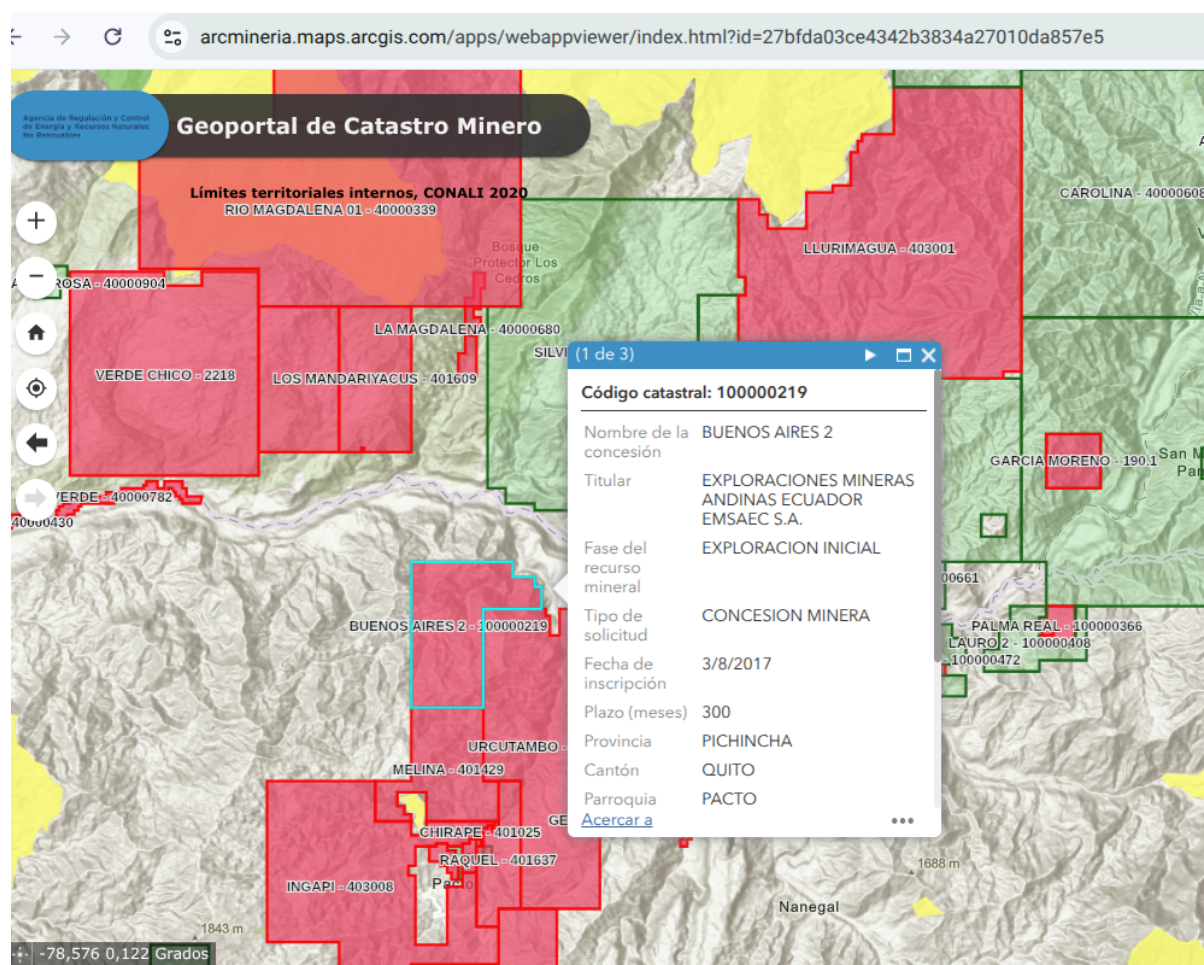
11 de julio de 2026

por Peter Shear, Director Ejecutivo, corporación ambiental APT Norte

English below

La llegada de la multinacional singapurense **Boroo Pte. Ltd.**, y su filial **Metallum 99**, dedicada a la adquisición y reactivación de proyectos de minería de oro, abre un nuevo capítulo en el escenario minero del Ecuador. La empresa ha iniciado su presencia en el país tras adquirir varias concesiones estratégicas que pertenecían a **EMSAEC S.A.**, filial de **CODELCO**, la empresa estatal chilena reconocida como el mayor productor de cobre del mundo.

Estas adquisiciones incluyen concesiones ubicadas en las provincias de **Bolívar, Carchi y Loja**, así como la concesión **Buenos Aires 2**, localizada en la parroquia de Pacto, en el noroccidente del Distrito Metropolitano de Quito, dentro de la **La Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha**, declarada por la UNESCO en 2018, parte de un ecosistema regional de importancia mundial por su extraordinaria biodiversidad, sus bosques nublados y los servicios ambientales que sostienen la vida de miles de personas.



Es importante señalar que, hasta la fecha, **las adquisiciones concesionarias realizadas por Boroo/Metallum 99 aún no se reflejan públicamente en el Catastro Minero del Estado**, ni han sido plenamente transparentadas por la **Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)**. Esta falta de actualización y acceso oportuno a la información genera preocupación en las comunidades y organizaciones defensoras del territorio, que exigen transparencia, participación ciudadana y garantías para conocer el alcance real de estas operaciones.

La transferencia de estas concesiones ocurre después de que **EMSAEC anunció su retiro del país en 2025**, tras una resolución judicial favorable a una acción de protección



presentada por pobladores de la zona de afectación del proyecto megaminero de cobre **Llurimagua en la parroquia de García Moreno, Cotacachi, Imbabura**. Dicha sentencia

reconoció vulneraciones relacionadas con los **Derechos de la Naturaleza** y determinó incumplimientos vinculados a los procesos de consulta ambiental, estableciendo un precedente relevante para la defensa constitucional de los ecosistemas y las comunidades.

Aunque **Boroo/Metallum 99** no adquirió hasta el momento la concesión Llurimagua, organizaciones sociales y ambientales advierten que la empresa figura como una de las principales candidatas dentro del **proceso de subasta** concesionaria actualmente en marcha. Este proceso se estaría desarrollando sin una información pública suficiente sobre sus etapas, criterios de evaluación y participación de las empresas interesadas, generando preocupación por la falta de transparencia y control ciudadano.

De acuerdo con la información conocida por actores territoriales, al menos seis empresas transnacionales están participando en este proceso, lo que refuerza la necesidad de exigir que cualquier decisión sobre la adjudicación de Llurimagua se realice bajo principios de transparencia, respeto a los Derechos de la Naturaleza y cumplimiento estricto de las obligaciones constitucionales del Estado ecuatoriano.

Quito Sin Minería: una voluntad popular que exige cumplimiento y control estatal efectivo

La biodiversidad y agua de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino de Pichincha fue defendido mediante procesos sociales sostenidos y protegido por la voluntad popular expresada en la **Consulta Popular Quito Sin Minería de 2023**, mediante la cual la ciudadanía prohibió las actividades mineras metálicas en zonas del **Chocó Andino del Distrito Metropolitano de Quito**, reafirmando la importancia de conservar este ecosistema estratégico frente a actividades extractivas incompatibles con su vocación ambiental, social y ecológica.

Sin embargo, pese a la decisión democrática expresada en las urnas, comunidades y organizaciones territoriales denuncian que la **minería ilegal continúa operando sin un control efectivo en sectores de las parroquias de Gualea y Pacto**. Esta situación genera preocupación por la falta de acciones contundentes de prevención, fiscalización y denuncia por parte de autoridades locales, municipales y estatales, así como por la limitada capacidad de control atribuida a la **Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM)** y a las instituciones ambientales competentes.

La preocupación aumenta ante los recientes cambios institucionales derivados de la **integración del antiguo Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Energía y Minas**, una reorganización que comunidades y organizaciones ambientales consideran que debe garantizar, y no debilitar, la protección ambiental, la independencia del control ecológico y el cumplimiento de los Derechos de la Naturaleza reconocidos en la Constitución ecuatoriana.



Para las comunidades del Chocó Andino de Pichincha, la protección efectiva del territorio no puede limitarse a declaraciones o decisiones jurídicas; requiere presencia permanente del Estado, control transparente de las actividades extractivas, sanción de operaciones ilegales y garantías para quienes defienden los ecosistemas y las fuentes de agua.

Antecedentes internacionales de Boroo: contaminación ambiental y vulneraciones de derechos territoriales

La preocupación por la llegada de **Boroo/Metallum 99** al Chocó Andino de Pichincha no surge únicamente por la ubicación de la **concesión Buenos Aires 2** que la empresa ha adquirido en la parroquia de Pacto, sino también por el contexto territorial existente y por los antecedentes de conflictos socioambientales asociados a sus operaciones mineras en otros países.

En las parroquias de Pacto y Gualea, dentro del Distrito Metropolitano de Quito, las comunidades han alertado sobre la persistencia de actividades de minería ilegal que continúan desarrollándose pese a la prohibición de actividades mineras metálicas establecida mediante la **Consulta Popular Quito Sin Minería de 2023**. Habitantes y organizaciones territoriales han señalado la falta de acciones suficientes de control, fiscalización y respuesta institucional por parte de las autoridades locales, municipales y estatales, así como la necesidad de fortalecer la supervisión de los organismos competentes.

En este escenario, resulta especialmente preocupante que comunidades locales hayan reportado la existencia de actividades relacionadas con minería dentro de la concesión **Buenos Aires 2**, actualmente bajo control de Boroo/Metallum 99. Estas denuncias comunitarias demandan una respuesta inmediata del Estado, mediante procesos de inspección, información pública, monitoreo ambiental independiente y transparencia sobre el estado actual de la concesión.

La combinación entre un territorio que enfrenta presiones por actividades mineras ilegales denunciadas, una limitada capacidad de control institucional y la llegada de un nuevo actor transnacional dedicado a la adquisición y reactivación de proyectos auríferos incrementa la preocupación de las comunidades del Chocó Andino de Pichincha. Para sus habitantes, cualquier avance de actividades mineras metálicas debe analizarse bajo el marco de la decisión ciudadana expresada en la Consulta Popular Quito Sin Minería, el cumplimiento de la Constitución ecuatoriana y el reconocimiento de **la Naturaleza como sujeto de derechos, conforme al artículo 71 de la Constitución del Ecuador**, que establece la obligación del Estado y de las personas de respetar integralmente la existencia, mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales de la naturaleza.

Los **antecedentes internacionales de Boroo** muestran que los conflictos mineros pueden involucrar no solamente impactos ambientales, sino también afectaciones al agua, contaminación, alteración de ecosistemas, afectación de territorios con valor cultural y conflictos relacionados con los derechos de las comunidades y de las personas defensoras del ambiente.



Mongolia: sitios sagrados, recursos hídricos y defensores amenazados

En Mongolia, comunidades de pastores nómadas del distrito de Mandal, provincia de Selenge, junto con organizaciones locales como OT Watch, han expresado preocupaciones relacionadas con actividades mineras vinculadas a proyectos de Boroo.

Entre las denuncias reportadas se incluyen preocupaciones por afectaciones a sitios considerados sagrados por comunidades locales, impactos sobre fuentes hídricas, contaminación asociada a actividades mineras y conflictos relacionados con la defensa comunitaria del territorio.

Estas experiencias internacionales representan un elemento de alerta para el Chocó Andino de Pichincha, donde las comunidades buscan garantizar que cualquier decisión sobre minería metálica se adopte con transparencia, participación efectiva, control ambiental independiente y pleno respeto a los derechos colectivos y a los Derechos de la Naturaleza.

Entre los principales cuestionamientos reportados se encuentran:

- Afectaciones denunciadas sobre sitios arqueológicos y montañas consideradas sagradas por comunidades locales durante el desarrollo del Proyecto Minero Gatsuurt.
- Preocupaciones por impactos sobre el río Gatsuurt, así como sobre afluentes de la cuenca del río Kharaa, vinculada al sistema hídrico internacional del río Selenga.
- Denuncias comunitarias relacionadas con sedimentos, presencia de arsénico y posibles impactos sobre fuentes de agua utilizadas por poblaciones ganaderas.
- Reclamos presentados ante mecanismos internacionales como los Puntos Nacionales de Contacto de la OCDE, solicitando mayor transparencia y responsabilidad ambiental.
- Denuncias de hostigamiento, judicialización y detenciones contra personas defensoras que cuestionaron la expansión minera.

Perú: agua contaminada, pasivos ambientales y defensa comunitaria

En Perú, comunidades campesinas de Quiruvilca y Usquil, en la región de La Libertad, en la sierra norte del Perú, han protagonizado procesos de defensa territorial relacionados con actividades mineras vinculadas al proyecto Lagunas Norte.

Entre las preocupaciones planteadas por organizaciones sociales se encuentran:

- Riesgos asociados al tratamiento de antiguos pasivos ambientales y estructuras mineras existentes, incluyendo posibles procesos de drenaje ácido y liberación de metales pesados.
- Conflictos relacionados con el uso del agua en cabeceras de cuenca, afectando actividades agrícolas, ganaderas y el abastecimiento humano.



- Reportes de monitoreos comunitarios que solicitaron investigaciones independientes ante concentraciones preocupantes de contaminantes en cuerpos hídricos.
- Denuncias de estigmatización y procesos legales contra líderes comunales que exigieron información ambiental, protección del agua y participación efectiva.

Ecuador: el Chocó Andino de Pichincha frente a un nuevo escenario de defensa territorial

Las parroquias afectadas por el avance de actividades mineras ilegales en el Chocó Andino de Pichincha actualmente son **Pacto y Guala**, territorios de extraordinaria importancia ecológica, social y cultural. Las cuencas afectadas son de los ríos **Chirapi, Piripe, Chulupo, Pishashi, Caoni, y Guayllabamba**, sistemas hídricos esenciales para el abastecimiento de agua, la agricultura, la conservación de la biodiversidad y la protección del bosque nublado.

La importancia de estos ecosistemas trasciende los límites de las comunidades locales. La cuenca del río Guayllabamba forma parte de la **macrocuenca del río Esmeraldas**, de la cual dependen aproximadamente **300.000 personas aguas abajo para su abastecimiento diario de agua para consumo humano**, además de sostener actividades productivas, ecosistemas estratégicos y la conectividad ambiental de la región.

Principales preocupaciones comunitarias

- La ubicación de la concesión Buenos Aires 2, actualmente bajo control de Boroo/Metallum 99, dentro de un territorio reconocido internacionalmente por su extraordinaria riqueza biológica y protegido por la voluntad ciudadana expresada en la Consulta Popular Quito Sin Minería de 2023, mediante la cual se prohibieron las actividades mineras metálicas en las zonas consultadas del Distrito Metropolitano de Quito.
- La necesidad de transparencia sobre el alcance real de las concesiones adquiridas por Boroo/Metallum 99, considerando que estas operaciones aún no se reflejan en el Catastro Minero del Estado, limitando el acceso oportuno a información pública fundamental para la vigilancia ciudadana.
- La obligación del Estado de garantizar procesos transparentes de información, participación y control ambiental antes de cualquier avance de actividades extractivas, respetando los derechos de las comunidades y el reconocimiento constitucional de la Naturaleza como sujeto de derechos, conforme al artículo 71 de la Constitución del Ecuador.
- El riesgo de impactos sobre nacientes de agua, corredores biológicos y economías sostenibles que dependen de la conservación del territorio, incluyendo la agroecología, la producción de panela, el turismo comunitario y otras actividades compatibles con la protección del bosque nublado.

Las experiencias con la **empresa transnacional minera Baroo** documentadas en Mongolia y Perú muestran que los conflictos mineros no se limitan únicamente a posibles impactos



ambientales; también involucran derechos colectivos, acceso al agua, patrimonio cultural, medios de vida comunitarios y garantías para quienes defienden sus territorios.

Frente a este nuevo escenario, las comunidades del **Chocó Andino de Pichincha** y las organizaciones de defensa territorial hacen un llamado a mantener una vigilancia ciudadana activa, exigir transparencia institucional y promover un modelo de desarrollo que respete la vida, la biodiversidad y los derechos constitucionales de la Naturaleza.

La defensa de la Naturaleza es la defensa del agua, de los bosques y de las futuras generaciones.

Fuentes y documentos de referencia

Ecuador: Boroo/Metallum 99, EMSAEC-CODELCO, Buenos Aires 2 y Llurimagua

- **Primicias – “Empresa minera de Singapur entra a Ecuador y adquiere varias concesiones que tenía la chilena Codelco”**
Reporta que Boroo adquirió concesiones pertenecientes a EMSAEC, filial de CODELCO, y que operará en Ecuador bajo el nombre de Metallum 99.
<https://www.primicias.ec/economia/empresas/empresa-minera-singapur-adquiere-concesiones-codelco-catastro-minero-126945/>
- **Expreso – “Boroo en Ecuador: los planes de la minera de Singapur que compró a Codelco”**
Detalla que Boroo adquirió concesiones de EMSAEC, incluyendo activos ubicados en varias provincias, y señala que Llurimagua quedó fuera de la operación de compra.
<https://www.expreso.ec/economia-y-negocios/boroo-ecuador-planes-minera-singapur-compro-codelco-287941.html>
- **Corte Constitucional del Ecuador – Derechos de la Naturaleza y consulta ambiental**
La jurisprudencia constitucional ecuatoriana ha reconocido que los ecosistemas pueden ser titulares de derechos y que las actividades extractivas deben respetar los derechos de la naturaleza, el agua y la participación ambiental.
Caso Bosque Protector Los Cedros:
<https://www.corteconstitucional.gob.ec/caso-nro-1149-19-jp-21-revision-de-sentencia-de-accion-de-proteccion-bosque-protector-los-cedros/>
- **Corte Constitucional del Ecuador – Consulta popular y Mancomunidad del Chocó Andino**
Información sobre el tratamiento constitucional de la consulta relacionada con actividades mineras en la Mancomunidad del Chocó Andino.
<https://www.corteconstitucional.gob.ec/dictamen-1-21-cp-21/>
- **Reuters – Arbitraje Ecuador-CODELCO por Llurimagua**
Información sobre el laudo arbitral relacionado con Llurimagua y la continuidad del control del proyecto por parte de ENAMI EP.



Mongolia: Mina Boroo y Proyecto Gatsuurt

- **Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) – Punto Nacional de Contacto**
Registro de una queja relacionada con operaciones mineras en Mongolia y lineamientos de conducta empresarial responsable.
<https://www.oecd.org/en/networks/national-contact-points-for-responsible-business-conduct/database/>
- **OECD Watch – Casos relacionados con minería y comunidades afectadas**
Base de datos de casos presentados por organizaciones sociales ante mecanismos de responsabilidad empresarial.
<https://www.oecdwatch.org/>
- **MiningWatch Canada – Denuncias sobre minería en Mongolia**
Documentación de organizaciones ambientales sobre preocupaciones relacionadas con agua, biodiversidad y participación comunitaria.
<https://miningwatch.ca/>

Perú: Lagunas Norte, Tres Cruces y conflictos socioambientales

- **Red Muqui – Informes sobre minería y conflictos socioambientales en Perú**
Informes sobre agua, minería, comunidades campesinas y monitoreo ambiental.
<https://muqui.org/>
- **Defensoría del Pueblo del Perú – Reportes de conflictos sociales**
Información oficial sobre conflictos vinculados a actividades extractivas y comunidades afectadas.
<https://www.defensoria.gob.pe/>
- **Front Line Defenders – Informes sobre personas defensoras ambientales**
Documentación internacional sobre riesgos, amenazas y criminalización de defensores de derechos humanos y ambientales.
<https://www.frontlinedefenders.org/>

Nota metodológica

Esta alerta reúne información proveniente de fuentes judiciales, organismos públicos, organismos internacionales, organizaciones de derechos humanos, organizaciones ambientales y medios de comunicación. Las referencias a impactos ambientales, vulneraciones de derechos o criminalización corresponden a denuncias, reportes o procesos documentados por dichas fuentes y deben diferenciarse de aquellas situaciones que cuentan con una sentencia judicial definitiva.



Mining Company Boroo Arrives in Ecuador's Chocó Andino of Pichincha: An International Record of Allegations Involving Environmental Impacts, Rights Violations, and the Criminalization of Nature Defenders

July 11, 2026

By Peter Shear, Executive Director, APT Norte Environmental Corporation

The arrival of Singapore-based multinational **Boroo Pte. Ltd.**, and its subsidiary **Metallum 99**, dedicated to the acquisition and revival of gold mining projects, opens a new chapter in Ecuador's mining landscape. The company has begun operations in the country after acquiring several strategic concessions previously held by **EMSAEC S.A.**, a subsidiary of **CODELCO**, the Chilean state-owned company recognized as the world's largest copper producer.

These acquisitions include concessions located in the provinces of **Bolívar, Carchi, and Loja**, as well as the **Buenos Aires 2 concession**, located in the parish of **Pacto**, in the northwestern area of the Metropolitan District of Quito, within the **Chocó Andino Biosphere Reserve of Pichincha**, designated by **UNESCO in 2018**. This reserve forms part of a globally significant regional ecosystem due to its extraordinary biodiversity, cloud forests, and environmental services that sustain the lives of thousands of people.

It is important to note that, to date, the concession acquisitions carried out by **Boroo/Metallum 99** are still not publicly reflected in the State Mining Registry, nor have they been fully disclosed by the **Agency for Regulation and Control of Mining (ARCOM)**. This lack of timely information updates and public access generates concern among communities and territorial defense organizations, which are demanding transparency, citizen participation, and guarantees to understand the actual scope of these operations.

The transfer of these concessions occurred after **EMSAEC** announced its withdrawal from Ecuador in 2025, following a favorable judicial ruling on a constitutional protection action filed by residents affected by the **Llurimagua copper megaproject** in the parish of **García Moreno, Cotacachi, Imbabura**. That ruling recognized violations related to the **Rights of Nature** and identified failures in environmental consultation processes, establishing an important precedent for the constitutional protection of ecosystems and communities.

Although **Boroo/Metallum 99** has not acquired the **Llurimagua concession to date**, social and environmental organizations warn that the company is among the leading candidates in the ongoing concession bidding process. This process is reportedly taking place without sufficient public information regarding its stages, evaluation criteria, and participation of interested companies, raising concerns about the lack of transparency and citizen oversight.

According to information known by territorial actors, at least six transnational companies are participating in this process, reinforcing the need to demand that any decision regarding the



awarding of **Llurimagua** be carried out under principles of transparency, respect for the **Rights of Nature**, and strict compliance with the constitutional obligations of the Ecuadorian State.

Quito Sin Minería: A Public Mandate Requiring Compliance and Effective State Oversight

The biodiversity and water resources of the **Chocó Andino Biosphere Reserve of Pichincha** have been defended through sustained social processes and protected by the popular will expressed in the **Quito Sin Minería Referendum of 2023**. Through this referendum, citizens prohibited metallic mining activities in areas of the Chocó Andino located within the Metropolitan District of Quito, reaffirming the importance of conserving this strategic ecosystem in the face of extractive activities incompatible with its environmental, social, and ecological values.

However, despite the democratic decision expressed at the ballot box, communities and territorial organizations report that illegal mining activities continue operating without effective oversight in areas of the parishes of **Gualea and Pacto**. This situation raises concerns regarding the lack of decisive prevention, monitoring, enforcement, and reporting actions by local, municipal, and national authorities, as well as the limited control capacity attributed to **ARCOM** and the relevant environmental institutions.

Concern has increased following recent institutional changes resulting from the integration of the former **Ministry of Environment** with the **Ministry of Energy and Mines**. Communities and environmental organizations consider that this restructuring must guarantee—not weaken—environmental protection, independent ecological oversight, and compliance with the **Rights of Nature** recognized in Ecuador's Constitution.

For the communities of the **Chocó Andino of Pichincha**, effective territorial protection cannot be limited to declarations or legal decisions; it requires permanent State presence, transparent oversight of extractive activities, sanctions against illegal operations, and guarantees for those defending ecosystems and water sources.

International Background of Boroo: Environmental Concerns and Territorial Rights Conflicts

Concerns regarding the arrival of **Boroo/Metallum 99** in the Chocó Andino of Pichincha do not arise solely from the location of the **Buenos Aires 2 concession** acquired by the company in the parish of Pacto, but also from the existing territorial context and the history of socio-environmental conflicts associated with its mining operations in other countries.

In the parishes of **Pacto and Gualea**, within the Metropolitan District of Quito, communities have raised concerns regarding the persistence of illegal mining activities despite the prohibition of metallic mining established through the **Quito Sin Minería Referendum of 2023**. Residents and territorial organizations have pointed to insufficient control, monitoring,



and institutional response by local, municipal, and national authorities, as well as the need to strengthen oversight by competent agencies.

Within this context, it is particularly concerning that local communities have reported the existence of mining-related activities inside the **Buenos Aires 2 concession**, currently controlled by **Boroo/Metallum 99**. These community reports call for an immediate State response through inspections, public information access, independent environmental monitoring, and transparency regarding the current status of the concession.

The combination of a territory facing pressures from reported illegal mining activities, limited institutional oversight capacity, and the arrival of a new transnational actor focused on acquiring and reactivating gold mining projects increases concern among communities of the Chocó Andino of Pichincha.

For residents, any advancement of metallic mining activities must be evaluated under the framework of the citizen decision expressed through the **Quito Sin Minería Referendum**, compliance with Ecuador's Constitution, and recognition of Nature as a rights-bearing entity, as established in **Article 71 of the Ecuadorian Constitution**, which requires the State and individuals to fully respect the existence, maintenance, and regeneration of Nature's life cycles.

Boroo's international background shows that mining conflicts may involve not only environmental impacts, but also effects on water resources, pollution, ecosystem disruption, territories of cultural value, and conflicts related to the rights of communities and environmental defenders.

Mongolia: Sacred Sites, Water Resources, and Threats Against Defenders

In Mongolia, nomadic pastoralist communities from **Mandal District, Selenge Province**, together with local organizations such as **OT Watch**, have expressed concerns regarding mining activities associated with Boroo-related projects.

Among the reported concerns are potential impacts on sites considered sacred by local communities, effects on water sources, pollution associated with mining activities, and conflicts related to community defense of their territories.

These international experiences represent an alert for the **Chocó Andino of Pichincha**, where communities seek to ensure that any decisions regarding metallic mining are made through transparency, effective participation, independent environmental oversight, and full respect for collective rights and the Rights of Nature.

Among the main concerns reported are:

- Reported impacts on archaeological sites and mountains considered sacred by local communities during the development of the **Gatsuurt Mining Project**.



- Concerns regarding impacts on the **Gatsuurt River** and tributaries of the **Kharaa River basin**, which is connected to the international water system of the **Selenga River**.
- Community reports regarding sediments, arsenic presence, and possible impacts on water sources used by livestock-raising communities.
- Complaints submitted through international mechanisms such as the **OECD National Contact Points**, requesting greater transparency and environmental responsibility.
- Allegations of harassment, legal proceedings, and arrests involving defenders who questioned mining expansion.

Peru: Contaminated Water, Environmental Liabilities, and Community Defense

In Peru, rural communities of **Quiruvilca and Usquil**, in the **La Libertad region** of northern Peru, have engaged in territorial defense processes related to mining activities associated with the **Lagunas Norte Project**.

Among the concerns raised by social organizations are:

- Risks associated with the management of historic environmental liabilities and existing mining infrastructure, including possible acid mine drainage processes and the release of heavy metals.
- Conflicts related to water use in headwater areas, affecting agricultural activities, livestock production, and human water supply.
- Community monitoring reports requesting independent investigations into concerning concentrations of pollutants in water bodies.
- Allegations of stigmatization and legal proceedings against community leaders who demanded environmental information, water protection, and effective participation.

Ecuador: The Chocó Andino of Pichincha Facing a New Territorial Defense Scenario

The parishes affected by the advance of reported illegal mining activities in the **Chocó Andino of Pichincha** are currently **Pacto and Guallea**, territories of extraordinary ecological, social, and cultural importance.

The affected watersheds include the rivers **Chirapi, Piripe, Chulupo, Pishashi, Caoni, and Guayllabamba**, essential water systems for human consumption, agriculture, biodiversity conservation, and the protection of cloud forests.

The importance of these ecosystems extends beyond local communities. The **Guayllabamba River basin** forms part of the larger **Esmeraldas River watershed**, upon which approximately **300,000 people downstream** depend for daily drinking water supply, while also supporting productive activities, strategic ecosystems, and regional ecological connectivity.



Main Community Concerns

- The location of the **Buenos Aires 2 concession**, currently controlled by **Boroo/Metallum 99**, within a territory internationally recognized for its extraordinary biological richness and protected by the citizen decision expressed through the **Quito Sin Minería Referendum of 2023**, which prohibited metallic mining activities in the consulted areas of the Metropolitan District of Quito.
- The need for transparency regarding the actual scope of the concessions acquired by **Boroo/Metallum 99**, considering that these transactions are not yet reflected in the State Mining Registry, limiting timely access to essential public information for citizen oversight.
- The State's obligation to guarantee transparent processes of information, participation, and environmental oversight before any advance of extractive activities, respecting community rights and the constitutional recognition of Nature as a rights-bearing entity under **Article 71 of Ecuador's Constitution**.
- The risk of impacts on water sources, biological corridors, and sustainable economies dependent on territorial conservation, including agroecology, panela production, community tourism, and other activities compatible with cloud forest protection.

The experiences associated with the transnational mining company **Boroo** documented in Mongolia and Peru show that mining conflicts are not limited only to possible environmental impacts; they also involve collective rights, access to water, cultural heritage, community livelihoods, and guarantees for those defending their territories.

Faced with this new scenario, communities of the **Chocó Andino of Pichincha** and territorial defense organizations call for active citizen oversight, institutional transparency, and the promotion of a development model that respects life, biodiversity, and the constitutional rights of Nature.

Defending Nature means defending water, forests, and future generations.